



Sábado 14 de octubre de 1950,
a las 10.45 horas

QUINTO PERIODO DE SESIONES

Documentos oficiales

Lake Success, Nueva York

INDICE

Página

Reservas a las convenciones multilaterales (A/1372) (continuación) 55

Presidente: Sr. V. OUTRATA (Checoslovaquia).

Reservas a las convenciones multilaterales
(A/1372) (continuación)

[Tema 56]*

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el debate sobre reservas a las convenciones multilaterales. Se han presentado a la Comisión dos nuevos documentos: una adición a la nota del Secretario General enumerando los instrumentos que contienen disposiciones relativas a las reservas (A/C.6/L.122/Add.1), y un proyecto conjunto de resolución presentado por Egipto, Francia, Grecia, Irán y el Reino Unido (A/C.6/L.123).

2. El Sr. MAURTUA (Perú) dice que los Estados tienen derecho a formular reservas a las convenciones; la finalidad de toda reserva, sencilla o compleja, consiste en salvaguardar la política o el derecho nacionales específicos del respectivo Estado contratante. También se hacen muchas reservas a consecuencia de interpretaciones contrapuestas de las convenciones. El problema planteado al Comité consiste, pues, en determinar el procedimiento que ha de seguirse con respecto a las reservas específicas; y en definir, en esa ocasión, los tipos de reservas y convenciones a que se aplica. Se halla, por tanto, en estrecha relación con el desarrollo progresivo del derecho internacional. A las normas de derecho internacional se llega por negociación y por transacción, y la fuerza de tales normas deviene de su aceptación por los Estados que las aplican. Únicamente cuando una norma es aceptada por la mayoría de los Estados, se la considera apropiada para la codificación. La codificación, a su vez, sirve para aclarar la norma aceptada por la mayoría de los Estados, contribuyendo así al desarrollo progresivo del derecho internacional.

3. Se han expresado durante los debates diversas opiniones, basadas en los principales sistemas seguidos en relación con las reservas. Una de esas opiniones abogaba por el sistema de la Sociedad de las Naciones, el cual excluía de la participación en una convención a cualquier Estado que formulase reservas que no fueran unánimemente aceptadas por las demás partes en la convención. La delegación del Perú se opone a esa

opinión, por cuanto estima que la finalidad de las convenciones consiste en crear nuevo derecho y que, en consecuencia, ha de hacerse todo lo posible por fomentar la adhesión a las convenciones. Los preceptos restrictivos en materia de reservas, servirían tan sólo para desanimar a los Estados de adherirse a las convenciones y privarían así de efectividad a tales instrumentos.

4. Otra opinión — con la que tampoco puede estar de acuerdo la delegación del Perú — es la encaminada a que la cuestión sea remitida en consulta a la Corte Internacional de Justicia. La Corte no es un órgano legislador, sino que solamente se ocupa de la interpretación y aplicación del derecho vigente.

5. Se ha propuesto, posteriormente, que se siga el sistema de la Organización de los Estados Americanos, es decir, que se permita a los Estados hacer reservas a las convenciones multilaterales, a condición de que, si alguno de los Estados partes en la convención no acepta tales reservas, se considerará que la convención no rige entre los Estados que han formulado reservas y los Estados que las objetan.

6. Recuerda que todavía quedan muchas materias sobre las que no existe acuerdo general; por ejemplo, la cuestión del reconocimiento *de facto* de los Estados y el derecho de procedimiento arbitral. Existen procedimientos para facilitar la solución de las dificultades derivadas de las reservas. Tal es el procedimiento prescrito en el artículo 36 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia, que dispone la aceptación gradual de la jurisdicción obligatoria de la Corte, o el procedimiento del Protocolo de Arbitraje Progresivo anejo al Tratado General de Arbitraje Interamericano de 1929. Ciertamente este sistema fue creado para aplicarlo a arreglos regionales, en virtud de los cuales Estados miembros se hallaban unidos por vínculos geográficos, económicos y de otra índole. Decir, como en el informe (A/1372) del Secretario General, que las convenciones de la Organización de los Estados Americanos, tienen más bien el carácter de un conjunto de acuerdos bilaterales, es exagerar el alcance y el número de las reservas que los Estados americanos han formulado a sus convenciones. Las convenciones americanas son consideradas por los gobiernos respectivos como una confirmación de la solidaridad regional.

* Indica el número del tema en el programa de la Asamblea General.

7. Más aun, en el informe del Secretario General se dice que las reservas alteran el texto de las convenciones. En él se señala a este respecto que, normalmente, las reservas tienen por objeto limitar, respecto del Estado interesado, la aplicación de determinada disposición. Si alteran o no el texto de la convención, eso ya no es cuestión de aplicación, sino de interpretación. Además, en casos excepcionales, una parte puede, mediante una reserva, aumentar sus obligaciones.

8. Otra cuestión que plantea el Secretario General consiste en que no son aceptables las reservas para el caso de constituciones de órganos internacionales. En opinión de la delegación del Perú, esas constituciones no difieren de otros acuerdos internacionales y, por tanto, cabe que formulen reservas los Estados que temen que sus disposiciones puedan menoscabar sus derechos de soberanía. Si una mayoría de Estados adopta una decisión que es inaceptable para la minoría o aun para un solo Estado, las reservas que éste formule se justifican plenamente como ejercicio de sus derechos de soberanía.

9. En vista de las anteriores consideraciones, la delegación del Perú cree que sería difícil hallar una norma general para la solución del problema de las reservas, y que esta cuestión debe ser referida a la Comisión de Derecho Internacional, la cual se ocupa actualmente del estudio de la cuestión de los tratados y tiene a su disposición toda la información necesaria para un examen del problema en todos sus aspectos. Además, la Sexta Comisión puede comunicar a la Comisión de Derecho Internacional, para su consideración, las distintas opiniones expresadas por sus miembros.

10. Afirma, en conclusión, que la delegación del Perú apoya el sistema de la Organización de los Estados Americanos, tal como se bosqueja en la proposición del Uruguay (A/C.6/L.116), por estimar que han de permitirse las reservas, como medio de obtener el máximo número de adhesiones. La delegación del Perú también apoya el texto revisado del proyecto de resolución de los Estados Unidos (A/C.6/L.114/Rev.1), que facilita una solución provisional en espera de la decisión definitiva sobre la cuestión de las reservas a los tratados multilaterales.

11. El Sr. HERRERA BAEZ (República Dominicana) dice que la cuestión a debate plantea varios problemas, tales como el de la validez de la aceptación, o de la no aceptación, por uno de los Estados contratantes, de las reservas hechas por otro Estado, y la del procedimiento que ha seguir el Secretario General como depositario de las convenciones internacionales multilaterales. La discusión del asunto en la Sexta Comisión ha servido para subrayar la gran complejidad del problema y las dificultades que encierran las varias soluciones posibles, y la delegación dominicana ha llegado a la conclusión de que la Comisión no está preparada todavía para arribar a una decisión final sobre este asunto.

12. Al parecer, prevalecen en la Comisión dos opiniones; son ellas las expresadas en las enmiendas propuestas por Uruguay y por el Reino Unido al proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos. La delegación dominicana está por completo solidarizada con el texto uruguayo, basado en el sistema que sigue la Organización de los Estados Americanos el cual, en comparación con el rígido sistema de la Sociedad de las

Naciones, es generoso y flexible. Como ha señalado el representante de los Países Bajos en la 219a. sesión, hay que juzgar las distintas propuestas en sí mismas y no desde el punto de vista de su mayor o menor adecuación a las organizaciones regionales o internacionales. Para las reservas a las convenciones, la elección entre una fórmula liberal y otra restrictiva ha de depender del tipo de convención de que se trate. En el informe del Secretario General se definen con claridad los distintos tipos de convención. Habrá que examinar también detalladamente los distintos tipos de reservas, tanto las de tipo tradicional, que restringen la aplicación de determinado artículo así como las de tipo "interpretativo", lo mismo que las reservas que conciernen a los principios generales. Cada tipo de reserva exige un procedimiento diferente y, en consecuencia, no se debe establecer una norma inflexible.

13. La delegación de la República Dominicana no desea estimular la presentación de reservas a las convenciones; un procedimiento positivo y flexible, es el más apropiado para fomentar las adhesiones a las convenciones internacionales y promover así el desarrollo progresivo del derecho internacional.

14. En vista de esas consideraciones, su delegación está de acuerdo con el representante de Francia en que, por ahora, la Comisión no debe adoptar una decisión de fondo, y apoya la propuesta de los Estados Unidos, de someter la cuestión a la Comisión de Derecho Internacional, la cual podría dedicarle una consideración más detenida que la Asamblea General.

15. Si la Comisión se decidiese, empero, por resolver la cuestión en el actual período de sesiones, su delegación apoyará la solución propuesta en la enmienda del Uruguay.

16. El Sr. KURAL (Turquía) observa que, a falta de un precepto jurídico generalmente aceptado, para las reservas a las convenciones internacionales que no son aceptadas por alguna de las partes, la Comisión parece sentir la necesidad de obtener dictamen de alguna fuente diversa de la Asamblea General, ya sea la Comisión de Derecho Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Cree, sin embargo, que la Sexta Comisión de la Asamblea General está plenamente capacitada para establecer un procedimiento con arreglo al cual la Secretaría, como órgano de las Naciones Unidas, pueda actuar en representación de éstas; pero se inclinará ante la opinión de la mayoría. En tal caso, la Comisión de Derecho Internacional es, sin duda, la entidad a la que se debe dirigir esa petición. La Comisión no se pregunta cuál es el precepto jurídico aceptado, puesto que no existe tal precepto; lo que pide es un estudio que sirva de base a la discusión futura, un estudio que permita a la Comisión sentirse libre para discutir sus conclusiones y, si fuese necesario, para modificarlas. La Comisión de Derecho Internacional reúne ambos requisitos. Es el órgano más autorizado para hacer tales estudios y sus relaciones particularmente estrechas con la Comisión permitirán a ésta discutir sus conclusiones con gran libertad.

17. Las opiniones consultivas que emite la Corte resuelven, usualmente, cuestiones de derecho. Aunque tales opiniones no sean imperativas, acaso no fuera prudente que las Naciones Unidas invitasen a la Corte a emitir opiniones que habrían de respetar sólo cuando lo creyeran conveniente. Crear demasiados precedentes

de tal carácter menoscabaría también el prestigio de la Corte.

18. La Comisión tiene también que decidir si, en espera del informe de la Comisión de Derecho Internacional, habrá de dar instrucciones al Secretario General sobre el procedimiento que deba seguir cuando le sea presentada una adhesión que contenga alguna reserva. No puede convenir con la opinión de no dar instrucción alguna al Secretario General, sino dejarle en libertad para interpretar la disposición jurídica aplicable, especialmente en razón de que una gran mayoría de las Naciones Unidas no está de acuerdo con el procedimiento seguido hasta ahora por la Secretaría. En el caso que se discute, corresponde a la propia Asamblea, más que a su órgano administrativo, interpretar el procedimiento que haya de observarse y asumir la responsabilidad de tal decisión.

19. Hay dos principales opiniones contrapuestas sobre la índole de las instrucciones que hayan de darse a la Secretaría: la que mantiene que las reservas a una convención multilateral impiden que el Estado que las haya formulado sea considerado como adherido a una convención, si cualquiera de las demás partes se niega a aceptar tales reservas; y aquella en que la convención no ha de considerarse como vigente entre el Estado que haya formulado la reserva y el Estado que se haya negado a aceptarla, pero entra en vigor entre el Estado que haya formulado reservas y cualquier otro que las acepte. La última opinión es la expresada en la enmienda del Uruguay y su delegación la prefiere.

20. En primer lugar, no parece justo que un Estado que se adhiera a una convención multilateral con reservas a la cuales no se haga objeción alguna por la mayoría de las partes, deba ser privado de sus beneficios por las objeciones de una minoría o incluso de una sola de las partes que se adhieran a la convención. Además, de muy poco valor sería para la comunidad internacional que un Estado quedase eximido de toda responsabilidad en un acuerdo internacional cuando pudiera asumir la totalidad menos una de las obligaciones establecidas en él.

21. En segundo lugar, dicha solución tiene en cuenta un derecho de los Estados generalmente reconocido y se adapta más que la otra a la situación real. Ciertamente es que una parte de la teoría jurídica se opone a dicha solución, tal como lo señala a la Comisión el informe del Secretario General. De todos modos, en la práctica los Estados siempre han formulado y siguen formulando reservas, y normalmente cuando las formulan lo hacen con el fin de adaptar sus obligaciones internacionales a su situación particular. Sería por ello imprudente despojarlos de ese derecho. Hay precedentes que fortalecen la creencia de que, en tales circunstancias, un Estado, en vez de resignarse a adherirse incondicionalmente a una convención, prefiere no adherirse a ella en modo alguno.

22. Se evitarán en lo porvenir muchas dificultades si se acepta la sugestión formulada por oradores que le han precedido, de que todas las convenciones incluyan una cláusula relativa a las reservas, que indique cuáles son las reservas aceptables y las inaceptables y los alcances de las reservas aceptables entre los Estados.

23. Acepta el orador la suposición general de que es innecesaria una definición de las reservas, pero desea

aclarar que en su opinión las únicas reservas posibles son las destinadas a restringir las obligaciones de la parte que las formula, y no las destinadas a aumentar las obligaciones asumidas por otros Estados.

24. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia), habiendo observado que la discusión ha sido hasta ahora principalmente teórica, opina que conviene más atender al aspecto práctico de las convenciones cuyo depositario es el Secretario General, sobre todo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Cuatro Estados Miembros signatarios de dicha Convención y un Estado no miembro que se adhirió a ella han formulado reservas a los artículos IX y XII. Algunas delegaciones, incluso la de Yugoeslavia, formularon reservas al artículo IX en el tercer período de sesiones de la Asamblea General. Las opiniones pueden diferir en cuanto a las limitaciones de la soberanía, pero, después de concluida una convención, toda reserva equivale a negarse a reconocer una parte integrante de ella, cosa que resulta inconcebible en el estado actual del derecho. Es de fondo y no de forma la cuestión que se plantea en cada caso concreto. Reservas como las que formularon Bulgaria, la RSS de Bielorrusia, Checoslovaquia, la RSS de Ucrania y la Unión Soviética, equivalen a colocar la Convención sobre una base diferente. La presentación a la Corte Internacional de Justicia, de controversias relativas a la interpretación, a la aplicación o a la ejecución de la Convención, constituye la única sanción jurídica incluida en ella. Si se permiten tales reservas, la obligación de los Estados de impedir y sancionar el delito de genocidio dejará de ser de derecho positivo y únicamente quedará sujeta al derecho natural. Esto significaría que la violación de obligaciones por los Estados que han formulado reservas no podría ser planteada ante un tribunal ni condenada, y que la interpretación, la aplicación y la ejecución de las obligaciones sólo dependería de la buena voluntad de los mismos Estados partes, noción diametralmente opuesta al sentido de la Convención.

25. Los cinco Estados que han formulado reservas protestaron de la inclusión en la Convención del artículo XII, la llamada "cláusula colonial". También su delegación protestó contra dicha cláusula por que impide la aplicación de la Convención precisamente en aquellas zonas donde se comete con más frecuencia el genocidio, permitiendo así que las Potencias coloniales sólo se adhieran a la Convención por lo que hace al Territorio metropolitano y que se reserven el derecho de castigar el delito de genocidio en los territorios de que son responsables en el orden internacional.

26. Si bien su delegación considerará pendiente esa cuestión hasta que la opinión pública de los países interesados influya sobre los gobiernos para que extiendan la validez de la Convención sobre el genocidio a los países no autónomos, reconoce que se ha concluido la Convención y que la llamada cláusula colonial es parte integrante de ella, de modo que las partes que se adhieren tienen derecho a utilizarla o no utilizarla. Aunque siempre será deber de las personas de ideas progresistas del mundo entero instar que sea abolida dicha cláusula, debe reconocerse que jurídicamente es imposible oponerle reservas, ya que una obligación estipulada por los Estados en una Convención no puede modificarse por la voluntad unila-

teral de otro Estado. Además, semejante política destruiría su propósito mismo.

27. En vez de asumir la obligación de impedir y de no cometer el delito de genocidio, influyendo así sobre la opinión pública mundial, los Estados que urgen a la aplicación integral de la Convención tratan de eximirse de esas obligaciones mediante sus reservas e impiden así que la Convención entre en vigor. A juicio del orador, el procedimiento justo para luchar por la aplicación integral de la Convención y por la abolición total de la cláusula colonial es el de adherirse a su texto y utilizar el derecho de revisarlo, conforme al artículo XVI. Adherirse con reservas a una convención que nada estipula en cuanto a reservas, es meramente un gesto político y una expresión de fidelidad a una idea, sin la aceptación de obligaciones internacionales en la forma en que pueden llegar a ser realmente efectivas. Eso es mera propaganda.

28. Son igualmente graves las reservas a los artículos IV, VI, VII y IX formuladas por el Gobierno de Filipinas en su instrumento de ratificación. Al reservarse el derecho a anular determinadas normas jurídicas incluídas en la Convención, recurriendo a su legislación nacional, dicho Gobierno ha atenuado la eficacia de la Convención, puesto que aquellas normas establecen el mínimo de obligaciones en el plano internacional para impedir y castigar un delito contrario al derecho internacional.

29. En tales circunstancias, es muy natural que el Secretario General, en su calidad de depositario de la Convención, haya solicitado instrucciones a la Asamblea General sobre el procedimiento que deba seguirse en materia de reservas. En el texto de la Convención no hay instrucciones específicas, y es deber de la Asamblea hallar alguna solución a problema tan complejo. Con razón el Secretario General pidió instrucciones en términos generales, pues es probable que la cuestión se plantee nuevamente en el caso de otras convenciones que se concierten bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

30. Aparte de la práctica de la Organización de los Estados Americanos y de la norma tradicional del consentimiento unánime, no existe solución específica al problema de las reservas en el derecho internacional actual. La delegación de Yugoslavia está convencida de que debe adoptarse la norma del consentimiento unánime como única solución recta y justa. En tal caso, sólo se aceptarán reservas si en el texto de la convención existen disposiciones específicas a ese respecto o si la convención contiene una cláusula general que permita las reservas. En principio, serían improcedentes las reservas presentadas en otras condiciones, pero podrían admitirse siempre que las aceptaran, explícita o implícitamente, todas las partes en la convención, con inclusión de los signatarios.

31. A su juicio, una sola objeción a una reserva bastaría para invalidar la ratificación del Estado que formulara la reserva. En efecto, si se permitiera que un Estado que presentara una reserva entrara a formar parte de la convención pese a las objeciones de otras partes, tal Estado gozaría de una posición privilegiada porque recibiría todos los beneficios de la convención sin contraer todas las obligaciones. Además, el Estado privilegiado sería precisamente el destructor de la unidad fundamental de la convención. Semejante situación

no sólo carecería de sentido desde el punto de vista jurídico, sino que constituiría un peligro para la colaboración política internacional.

32. A fin de asegurar la aceptación de los principios básicos de la convención y de permitir, al mismo tiempo, cierta flexibilidad en cuestiones de detalle, la práctica general es especificar en el texto de la convención los asuntos sobre los cuales pueden formularse reservas o bien subordinar la aceptación de reservas al consentimiento de todas las partes contratantes. Si cada una de las partes pudiera decidir hasta qué punto desea obligarse, la convención se convertiría en un simple conjunto de disposiciones, en vez de constituir una enumeración de normas obligatorias. Desaparecería entonces el espíritu mismo de la convención, pues sus disposiciones tendrían carácter obligatorio con respecto a algunos Estados, en tanto que otros las utilizarían meramente para proclamar de palabra su adhesión a la colaboración internacional, sin contribuir a ella en la práctica.

33. Por estos motivos, la delegación de Yugoslavia acepta las conclusiones del informe del Secretario General (A/1372) y la cita extraída del memorándum presentado el 9 de febrero de 1925¹ por el Reino Unido. En consecuencia, apoyará el proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América (A/C.6/L.114/Rev.1), como base de las instrucciones que han de darse al Secretario General. Concuera con algunas delegaciones en que pueden complementarse esas instrucciones y apoya la enmienda presentada por Suecia (A/C.6/L.121) y los párrafos 3 y 4 de la enmienda presentada por el Reino Unido (A/C.6/L.115). Sería en su opinión provechoso que el representante de los Estados Unidos de América y las delegaciones que han presentado enmiendas trataran de llegar a acuerdo sobre un texto conjunto.

34. Es esencial que tan pronto sea posible se den al Secretario General algunas instrucciones provisionales a este respecto. Además de dar instrucciones provisionales al Secretario General, la Asamblea debe ocuparse de que se estudie detalladamente el problema, a fin de que puedan establecerse algunas normas concretas y duraderas.

35. A este respecto, su delegación apoya la propuesta de los Estados Unidos de América, de referir el problema a la Comisión de Derecho Internacional y no a la Corte Internacional de Justicia.

36. En primer lugar, en su anterior período de sesiones la Comisión de Derecho Internacional ya inició el estudio del problema, y ha de estar en condiciones de presentar recomendaciones a tiempo para el sexto período de sesiones de la Asamblea.

37. En segundo lugar, cualquier recomendación relativa a reservas implicará el desarrollo de nuevas normas jurídicas, más que la interpretación del derecho existente. Además, en virtud del Artículo 13 de la Carta, todo lo relativo al desarrollo del derecho internacional es de competencia de la Asamblea General y la Asamblea General ha establecido la Comisión de Derecho Internacional precisamente para cumplir ese aspecto de sus funciones. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia no es un cuerpo legislativo y su función es dar opiniones consultivas sobre cues-

¹ *Journal officiel* de la Sociedad de las Naciones, 1926 páginas 612-613.

tiones jurídicas concretas, fundándose en el derecho existente. Sobre este punto es bien claro el párrafo 2, del Artículo 65 del Estatuto de la Corte.

38. Por último, algunas delegaciones han sostenido que no bastará una recomendación de la Asamblea General basada en un informe de la Comisión de Derecho Internacional, pues no tendría carácter obligatorio para las partes contratantes. Es muy cierto que las recomendaciones de la Asamblea General no obligan a los Estados Miembros, pero en el caso presente se dirigiría la recomendación al Secretario General y no a los Estados Miembros. La cuestión planteada a la Comisión es la del procedimiento que debe seguir el Secretario General en su calidad de depositario de convenciones multilaterales. A su juicio la Asamblea General tiene, en consecuencia, indudable competencia para formular instrucciones claras y precisas al respecto.

39. Por lo tanto, la delegación de Yugoslavia no puede aceptar los párrafos 1 y 2 del proyecto de enmienda presentado por el Reino Unido (A/C.6/115) ni los cuatro primeros párrafos del proyecto de enmienda presentado por Francia (A/C.6/L.118). Sin embargo, apoyará el párrafo final del proyecto de enmienda presentado por Francia, el cual recomienda a los Miembros de las Naciones Unidas que en la medida de lo posible se abstengan de formular reservas.

40. Comparte el orador las opiniones expuestas por el representante del Uruguay en apoyo de su proyecto de enmienda (A/C.6/116), pero mientras no se haya estudiado con más cuidado este asunto prefiere sujetarse a la norma del consentimiento unánime. La Organización de los Estados Americanos está formada por países que tienen mucho en común y es discutible que el sistema relativo a reservas adoptado por ellos pueda extenderse con provecho a todos los demás países. La práctica de introducir en las convenciones cláusulas que prohíben reservas sobre determinados puntos constituye un argumento más contra la adopción con fuerza retroactiva, del sistema panamericano por las Naciones Unidas. Naturalmente, deben transmitirse a la Comisión de Derecho Internacional la enmienda propuesta por el Uruguay y el memorándum presentado por dicha delegación (A/C.6/L.117), junto con todos los demás documentos pertinentes.

41. En conclusión, su delegación hace hincapié en que es deber de la Asamblea establecer normas para la cooperación internacional.

42. El Sr. TARAZI (Siria) observa que se ha tratado de distinguir claramente entre el procedimiento y el fondo de la cuestión que se discute, pero que ambos aspectos están estrechamente vinculados. En todos los sistemas jurídicos se ha establecido el procedimiento como método para proteger el derecho; insistir exclusivamente en el procedimiento, a expensas de un derecho reconocido legítimamente, significaría sancionar medidas arbitrarias.

43. Como el representante de Polonia ha mostrado, es necesario distinguir entre convenciones bilaterales y convenciones multilaterales. En las primeras, se agotan todos los argumentos en el curso de las negociaciones, de modo que nunca se plantean cuestiones de

reservas. En las segundas se debe distinguir entre las convenciones concertadas antes de la fundación de la Sociedad de las Naciones y las posteriores a ésta.

44. La Carta de las Naciones Unidas está inspirada en los principios de los organismos internacionales desde su origen. Sin embargo, se funda principalmente en un doble concepto: la universalidad y la igualdad soberana de los Estados. Algunos expositores del derecho han tratado de limitar la soberanía al concepto de la competencia reservada, en tanto que otros han tratado de conservar su sentido auténtico.

45. Cualquiera que sea el resultado de esa controversia, ambas interpretaciones muestran que en la práctica la existencia de la Carta de las Naciones Unidas no ha menoscabado la independencia de los Estados. Resulta fácil demostrar ese hecho en materia de convenciones multilaterales. Cuando se plantean en la Asamblea General cuestiones de esa índole, es bien sabido que cada delegación puede examinarlas en ejercicio de la plena soberanía del Estado que representa.

46. Los autores de la Carta tuvieron cuidado de exponer otro principio: el de la igualdad. Un voto de la mayoría puede menoscabar tal igualdad, puesto que éste puede colocar en posición desfavorable a los Estados que defienden sus legítimos intereses nacionales. Permitir que dichos Estados formulen reservas en el momento de la firma o de la ratificación de una convención multilateral discutida en la Asamblea General y recomendada por ella, equivale en cierto sentido a restablecer el equilibrio. Pero, impedir que entren en vigor las convenciones so pretexto de que no se han aceptado las reservas, es también poner trabas al desarrollo de las relaciones jurídicas internacionales.

47. Los proyectos de resolución presentados a la Comisión procuran solucionar dicho problema mediante la petición de un dictamen a la Comisión de Derecho Internacional o a la Corte Internacional de Justicia. Pero cualquiera que sea la solución que se adopte, el dictamen que se emita habrá de ser examinado en un período ulterior de sesiones de la Asamblea General, la cual sólo puede formular recomendaciones respecto de él. Siempre debe tenerse presente que las Naciones Unidas, en la etapa actual del derecho internacional, no constituyen un superestado de tipo federal. La Asamblea General no es el órgano legislativo de una organización federal mundial.

48. Está dispuesto el orador a adherirse a las opiniones expuestas en el memorándum presentado por la delegación del Uruguay. De todos modos, la cuestión requiere un estudio más detallado y el número de proyectos de resoluciones presentados exige la creación de una subcomisión, como medida práctica para coordinarlas. Si no se logra tal coordinación, la subcomisión informará a la Comisión y la Comisión estará en condiciones de examinar el asunto nuevamente en forma más concreta.

49. El Sr. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se levante la sesión.

Queda aprobada la moción.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.